



Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2017 00203 00
ACCIONANTE: COLPENSIONES
ACCIONADO: ELISEO ANTONIO PINEDA CHAPARRO
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

De conformidad con el informe secretarial que antecede, se procederá a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Sea lo primero señalar, que el artículo 182A del C.P.A.C.A., faculta al Juez para proferir sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia inicial y audiencia de pruebas. Las condiciones para prescindir de la respectivas audiencias se enuncian así: (i) cuando el asunto sea de puro derecho; (ii) cuando no haya que practicar pruebas, (iii) cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, (iv) cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Por manera que los presupuestos para prescindir o no de la audiencia inicial, se contraen a evaluar los requerimientos probatorios para definir el asunto.

No obstante, el artículo 180 (Num. 6º) del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, determinó que en el auto que se pronuncie sobre las pruebas se decidirán las excepciones pendientes de resolver y la fijación del litigio. Al armonizar esta norma con la citada en el párrafo anterior - artículo 182A del CPACA – resulta válido afirmar que al momento de revisar las aludidas condiciones para prescindir de la celebración de las respectivas audiencias, se pueden decidir las excepciones previas y la fijación del litigio. Ello se explica en que el artículo 180 del CPACA estableció que previo a pronunciarse sobre las pruebas se deben decidir las excepciones previas y fijar el litigio. La secuencia de las decisiones obedece a que en caso de prosperar alguna excepción previa, resultaría inoficioso tratar el tema probatorio. Igualmente, al revisar la fijación litigio se adquiere el criterio suficiente para determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas que soliciten las partes. Siendo así, el Despacho primero asumirá el estudio de las excepciones previas y de la fijación del litigio, antes abordar los aspectos probatorios a los que alude el artículo 182A del CPACA.

1. EXCEPCIONES

El accionado propuso la excepción previa que intituló “ineptitud de la por falta de los requisitos formales: no haber agotado el requisito de procedibilidad previo de la conciliación prejudicial ante el ministerio público”. La excepción se interpuso en escrito separado de la contestación de la demanda, visible a folios 53 al 58 del expediente. Sin embargo, con la contestación de la demanda se formularon las siguientes excepciones: “improcedencia de la acción de lesividad”, y “prohibición de restituir las mesadas pensionales adquiridas conforme a derecho”. De acuerdo con la denominación de la excepción de “improcedencia de la acción de lesividad”, pareciera que se tratará de una excepción previa, pero al leer la sustentación apunta a cuestiones de fondo. De manera que las excepciones propuestas con la demanda se resolverán con la sentencia.



La excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales se propone con fundamento en el artículo 100 (Num. 5⁰¹) del CGP. El requisito que la defensa echa de menos es el previsto en el artículo 161 (Num. 1⁰²) del CPACA, según el cual el trámite de la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad. Apoyó su postura en la jurisprudencia que ha convalidado la norma y destacado la importancia de aquella etapa pre procesal. Si bien, reconoce que el artículo 97 (último inciso³) del CPACA dispone que la administración puede demandar sus propios actos sin acudir al trámite de la conciliación, señala que la propia norma establece como condición que el acto se hubiere obtenido por medios fraudulentos o ilegales. Tal presupuesto no lo demostró la entidad, y por consiguiente, no podía liberarse de la obligación procesal. También reconoce los asuntos pensionales no son conciliables, empero, aduce que el punto de la devolución de dineros recibidos por el pensionado si es un aspecto conciliable, lo cual implicaba que tuviera que acudir al conciliador público.

La parte actora recorrió el traslado de las excepciones mediante memorial allegado a folios 70 a 72 del expediente. Sin embargo, sólo se refirió a las excepciones planteados con la contestación de la demanda, que como se ha visto no son excepciones previas sino de fondo. Ello es igual a decir que la entidad omitió pronunciarse frente a la excepción previa que se presentó en escrito separado de la contestación de la demanda.

Para decidir se CONSIDERA:

La jurisprudencia tiene bien determinado que los asuntos pensionales no son conciliables, por tratarse de derechos ciertos e indiscutibles. La razón estriba en que las condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes se encuentran en la ley. Incluso, la ilegalidad de la pensión opera cuando se incumplen los requisitos para conceder la prestación, por consiguiente, se cumple la condición del artículo 161 (Num. 1⁰⁴) del CPACA que libera a la administración del trámite conciliatorio. Por manera que más adelante se declarará infundada la excepción previa de “ineptitud de la por falta de los requisitos formales”.

2. FIJACIÓN DEL LITIGIO.

La demanda persigue la nulidad de la Resolución GNR 018823 del 12 de diciembre de 2012 proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de Pensiones de la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES. El acto acusado reconoció la pensión de sobrevivientes a Eliseo Antonio Pineda Chaparro con ocasión del fallecimiento de Alexander Pineda López. A título de restablecimiento del derecho se pretende la devolución de los dineros pagados con ocasión del reconocimiento de la prestación.

¹ “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones”

² “Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”

³ “Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.”

⁴ “Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”



En corolario de las pretensiones, el litigio se fija en los siguientes términos: determinar si es legal o ilegal la pensión de sobrevivientes reconocida mediante la Resolución GNR 018823 del 12 de diciembre de 2012, y si hay lugar o no a la devolución del pagado por tal concepto.

3. PRUEBAS.

3.1 Parte actora. La accionante aportó los documentos con la demanda, y se abstuvo de solicitar pruebas. El Despacho decretará e incorporará al expediente las pruebas aportadas con la demanda.

3.2 Parte demandada. La defensa no aportó ni solicitó la práctica de pruebas.

4. AUDIENCIAS.

Es claro que están reunidas las condiciones para prescindir de las audiencias de inicial y de pruebas, previstas en el artículo 180 y 181 del CPACA, respectivamente. Sobre la audiencia de alegaciones y juzgamiento enunciada en el artículo 182 del CPACA., se resolverá una vez sobre ejecutoria la presente providencia. Ello, por cuanto el artículo 182A del CPACA exige que se cumpla lo decidido sobre las excepciones previas, las pruebas y la fijación del litigio, antes de avanzar con el trámite del proceso.

5. MEMORIALES.

5.1 Solicitud de vinculación por Litis Consorte Necesario. COLPENSIONES solicitó vincular a María Lina Sierra Velandía como Litis Consorte Necesario, en razón a que ella también pidió que se le concediera la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente del afiliado fallecido, Alexander Pineda López. Precisó que ella reclamó la prestación con posterioridad a la expedición del acto acusado. La aludida petición generó las Resoluciones GNR 358502 de 16 de diciembre de 2013 y GNR 1530 de 23 de enero de 2015. La primera negó la pensión de sobrevivientes, mientras que la segunda se generó la solicitud del consentimiento al actual beneficiario para revocar el acto acusado. Posteriormente, se expidió la Resolución SUB 63133 de 5 de marzo de 2020 que revocó la Resolución GNR 018823 de 12 de diciembre de 2012, que es el acto acusado. Apoya la solicitud de vinculación en el artículo 61 del CGP, en cuanto dispone que se puede efectuar la integración del contradictorio hasta antes de dictar sentencia.

El accionado se opuso a que se integrara el contradictorio con María Lina Sierra Velandía, porque no se cumplen con los requisitos del artículo 61 del CPG. Citó un aparte jurisprudencial⁵, según la cual la figura del Litis Consorte Necesario se examina de acuerdo a las circunstancias del caso. A su criterio, la participación en el proceso de María Lina Sierra Velandía no se requiere para determinar la legalidad del acto acusado o definir de fondo el asunto, de acuerdo con otro texto de la jurisprudencia del Consejo de Estado⁶. En todo caso, considera que para la intervención sólo se tenía plazo hasta cuando se fije fecha de realización de audiencia inicial, según el artículo 224 del CPACA. A ello que la entidad hace la solicitud ante la

⁵ Rad. 15001 23 31 000 2007 00133 02 (43049).

⁶ Rad. 25000 23 26 000 2017 01428 01 (63121).



imposibilidad de reformar la demanda. Así quiso señalar que la interesada en la solicitud ha incumplido con sus deberes.

Para decidir se **CONSIDERA:**

El Despacho procederá a revisar los aspectos procesales como sustanciales de la solicitud de integración del contradictorio, para no dejar margen de dudas acerca de la decisión.

En el plano procesal, se observa que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se rige por noma especial. Esto significa que el proceso contencioso administrativo se orienta por el código general del proceso ante los vacíos en el estatuto procesal especial. Si bien es cierto, el artículo 61 del CGP permite que la pluricitada solicitud se eleve antes de la sentencia, la noma especial, esta es, el artículo 224 del CPACA, dispone que oportunidad vence con el auto que fija la fecha de audiencia inicial. Aquí se había fijado audiencia inicial mediante auto de 18 de julio de 2019, y la solicitud de vinculación procesal data del 5 de marzo de 2020. No obstante, y ante mejor criterio, se evaluará los aspectos sustanciales del memorial en estudio.

La figura del Litis Consorcio Necesario opera cuando dos o más personas forman parte de la misma relación jurídica sustancial. Tal criterio invita a consultar los hechos de la demanda con el fin de determinar si se puede definir la legalidad o ilegalidad de la pensión de sobrevivientes concedida a Eliseo Antonio Pineda Chaparro sin necesidad de vincular a María Lina Sierra Velandía. La entidad aduce en los hechos de la demanda que pretende la nulidad del acto prestacional porque, con posterioridad a su expedición, se presentó María Lina Sierra Velandía a solicitar la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente. Este supuesto fáctico es igual al expuesto en la solicitud de Litis Consorcio Necesario.

El Despacho considera que el supuesto fáctico que sustenta las pretensiones de la demanda no traba la relación jurídica sustancial *per se*. La legalidad o ilegalidad del acto acusado no depende de la postulación de otros beneficiarios permitidos por ley, sino de la contundencia de las pruebas. Ello significa que para definir si la prestación concedida a Eliseo Antonio Pineda Chaparro es legal o ilegal, sólo se requiere examinar las pruebas que el beneficiario aportó durante el trámite pensional. Fíjense que tal circunstancia no exige evaluar la condición con la que se presenta María Lina Sierra Velandía ante la administración, pues el asunto se reduce a la suficiencia probatoria de los documentos aportados por Eliseo Antonio Pineda Chaparro.

Así las cosas, y sin necesidad de más razonamientos, se denegará la mencionada solicitud.

5.2 Poderes. Mediante auto de 18 de julio de 2019 se requirió a COLPENSIONES para que nombrará apoderado. La abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza, en calidad de representante legal de PANIAGUA & COHEN ABOGADOS SAS, presentó poder otorgado por la entidad a la sociedad mediante escritura pública a 395 de 12 de febrero de 2020 de la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá D.C. Ella sustituyó el poder a la abogada Lina María Posada López, con cédula de ciudadanía 1.053.800.929 expedida en Manizales y tarjeta profesional 226.156 del CSJ. El Despacho estima válido los documentos para proceder a realizar los respectivos reconocimientos de personería por adjetiva como principal y sustituta respectivamente.



Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO. DECLARAR que infundada la excepción previa intitulada “ineptitud de la por falta de los requisitos formales: no haber agotado el requisito de procedibilidad previo de la conciliación prejudicial ante el ministerio público”, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO. La **FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si es legal o ilegal la pensión de sobrevivientes reconocida mediante la Resolución GNR 018823 del 12 de diciembre de 2012, y si hay lugar o no a devolución del pagado por tal concepto.

TERCERO. DECRETAR E INCORPORAR al expediente, con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de prueba aportados con la demanda, como las legales oportunamente aportadas al proceso.

CUARTO. PRESCINDIR de la audiencia inicial y de pruebas establecidas en la ley para tramitar el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA.

QUINTO. NEGAR la vinculación al proceso de María Lina Sierra Velandía en calidad de Litis Consorte Necesario, por lo antes considerado.

SEXTO. RECONOCER a las abogadas Angélica Margoth Cohen Mendoza y Lina María Posada López como apoderada principal y sustituta, respectivamente, de la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, conforme a los documentos arriba referenciados.

SÉPTIMO. Ejecutoriado el presente auto, devuélvase el expediente al Despacho para continuar con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
JUEZ

8P8

Firmado Por:

LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ
JUEZ

JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.-SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e469cf48bd6504487796fc188f9da39f0b5ec94e320eb4fa1e15babfb6e82357

Documento generado en 16/04/2021 02:48:33 PM



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001-33-35-010-2017-00203-00

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>